

## **DERECHOS SOCIALES. MÁS ALLÁ DEL DISCURSO Y EL VOLUNTARISMO.**

*Adolfo Alvial*

*Consultor internacional en acuicultura*

Los derechos sociales, como el acceso a la salud, vivienda, educación y pensiones son esenciales para una vida digna. El Estado tiene la responsabilidad de garantizarlos, pero esto requiere de financiamiento sostenible. Un crecimiento económico sólido y la inversión privada son claves para lograrlo. Aumentar el gasto público sin control puede generar inflación y empobrecer a la población, especialmente a los más vulnerables. Subir impuestos desincentiva la inversión y dificulta el crecimiento. La justa satisfacción de los derechos sociales exige recursos sostenibles, no discursos ni voluntarismo. La inversión privada, más allá de ideologías, es fundamental para alcanzar este objetivo.

En las últimas dos décadas, Chile ha experimentado un preocupante retroceso económico. Su posición en el ranking latinoamericano de crecimiento del PIB ha caído drásticamente, pasando del 3er lugar en 2012 al 6° en 2020 y a un 18° lugar en 2023. La inversión extranjera, que alcanzó US\$ 19.935 millones en 2012, ha fluctuado desde entonces en niveles significativamente inferiores, con un repunte apenas notable a US\$ 21.738 millones en 2023, apenas superior al de una década atrás. La salida de capitales acumulada entre 2010 y 2019 ascendió a US\$ 13.204 millones, mientras que entre 2020 y 2023 la cifra creció a US\$ 20.583 millones, reflejando un aumento en la salida de capital. A su vez, el país ha descendido en el ranking global de competitividad, pasando del puesto 19° en 2005 al 44° en 2023. Este panorama contrasta con la imagen de Chile como un modelo de desarrollo reconocido internacionalmente en el pasado. Hoy, el país se ubica en los últimos puestos de algunos rankings regionales, como el de crecimiento económico actual y proyectado. Es imperativo que Chile revierta este curso de deterioro con urgencia. Se requiere superar la parálisis política y alcanzar acuerdos consensuados para abordar los desafíos que aquejan al país.

Combatir con firmeza y efectividad el crimen organizado y el terrorismo es fundamental para generar un clima de seguridad que propicie la inversión y el crecimiento sostenible. La seguridad es clave para la recuperación, en un marco en que los homicidios han aumentado un 40% en los últimos seis años y los secuestros en un 140% en la última década. La percepción de inseguridad, que alcanzó un máximo histórico del 90,6% en 2023, crea un entorno adverso para la inversión y el crecimiento. A la inconsistencia política para recuperar la inversión y el crecimiento, se ha sumado la inseguridad. Si no logramos superarla con decisión y celeridad, la inversión es una utopía al igual que el crecimiento. En ese contexto, el reforzamiento de los derechos sociales es una vana declaración de intenciones que terminará frustrando las expectativas de lograr un país más justo y equitativo. Esta situación es completamente aplicable a nivel regional, donde debemos poner todos nuestros esfuerzos en prevenir estas condiciones que encaminan a una ruta de empobrecimiento, que tomará mucho tiempo revertir.